

## LAS INFRACIUDADES DE KARACHI

Karachi, el mayor puerto del mar Árabe, tiene actualmente una población de más de 20 millones de habitantes, a la altura de Bombay, y es la octava mayor ciudad del planeta. Su control del cuadrante norte-este del océano, con una zona interior que se extiende por el valle del Indo hasta Afganistán, la ha convertido en el principal puerto de entrada para el armamento y los suministros estadounidenses para la «guerra contra el terror», mientras que los refugiados –y la heroína– han circulado en la dirección contraria. Desde el sangriento nacimiento de Pakistán con la partición de la India británica, el explosivo crecimiento de la ciudad ha estado impulsado más a menudo por las sacudidas de crisis geopolíticas, agrarias y ecológicas que por el tirón del desarrollo económico. La vida en sus florecientes *katchi abadis*, o «asentamientos sin pavimentar», tiene mucho en común con la de otras infraciudades gigantes, como Bombay, con la diferencia de que aquí la violencia desempeña un papel mucho más importante. La gran mayoría de los habitantes de la ciudad no sólo están inmersos en una situación de competencia entre ellos, en una desesperada lucha por sobrevivir, sino que también se enfrentan a un brutal clima de agresión alimentado por agrupaciones políticas de carácter mafioso, la más influyente de las cuales también controla la fuerza armada del Estado. ¿En qué condiciones viven sus habitantes y qué puede impulsar a las crecientes cantidades de gentes que llegan para tratar de sobrevivir aquí?

En vísperas de la independencia en 1947 el puerto marítimo de Karachi tenía menos de medio millón de habitantes, la mayor parte hindúes, que vivían tras los muros de la ciudad vieja o en pueblos de pescadores a lo largo de la costa. Los británicos levantaron los muelles y los almacenes, construyeron un acantonamiento militar y trazaron calles, flanqueadas por árboles, para utilizarlas para ir hasta el sur de la ciudad «nativa», unas zonas que todavía se conocen como Clifton y Defence. La partición produjo el éxodo hacia India de parte de los hindúes de la ciudad y la llegada desde ese país de un número mucho mayor de musulmanes: alrededor de medio millón de mohajirs (refugiados) de lengua urdu abandonaron propiedades y posesiones al sur de la nueva frontera para huir a la que ahora era la capital de Pakistán. Inicialmente los mohajirs fueron acogidos en refugios temporales, en parques y terrenos libres del Estado. Con las po-

líticas de modernización conservadoras que se emprendieron a principios de la década de 1950, y que se intensificaron entre 1958 y 1968 bajo el régimen militar del general Ayub Khan, se construyeron nuevos municipios satélites alrededor de la ciudad y se desarrolló la industria pesada con la ayuda de préstamos del extranjero. Los diferentes sectores de la clase obrera de Karachi que crecía rápidamente tenían diferentes bases étnicas: los trabajadores de los muelles procedían de los trabajadores makranibaluch de la vieja Karachi, los mohajirs predominaban en la industria pesada y en las empresas multinacionales; los habitantes de los pueblos de la frontera norte-oeste, de Hazara y del Punjab meridional, fueron reclutados por intermediarios para los distritos textiles donde funcionaban numerosas pequeñas empresas en condiciones intolerables.

Estos emigrantes del interior se congregaron con base en sus diferentes lenguas –sindhi, seraiki, pastún, swat, hazara o punjabí– sobre tierras desocupadas próximas a las zonas industriales. Si bien su precaria situación les convertía en una presa fácil para la manipulación política particularista, no obstante hubo intentos de llegar a una solidaridad horizontal por encima de las diferencias étnicas en las manifestaciones de trabajadores que se produjeron en Karachi a finales de la década de 1960 y que se unieron a la agitación estudiantil para derrocar a Ayub en 1968. La militancia alcanzó su punto más elevado en los años posteriores<sup>1</sup>. El Partido Popular de Pakistán (PPP), de Zulfikar Ali Bhutto, hizo campaña con el eslogan «*Roti, kapra aur makan*» [*Pan, vestido, refugio*] y declaró la guerra a las «veintidós familias» que se decía que controlaban la industria capitalista (aunque no a las pocas docenas de familias que poseían la mayor parte de la tierra del país). Pero una vez en el poder, después del desmembramiento de Pakistán en 1971 –cuando los dirigentes pro occidentales se negaron a aceptar la mayoría alcanzada por la Liga Awami– Bhutto cambió de táctica: aunque algunos trabajadores fueron enrolados en sindicatos próximos al PPP y recompensados con beneficios y subidas salariales, en otras partes la norma fue una política rompehuelgas y antisindical. La Constitución que proclamó Bhutto en 1973 introdujo un sistema federal con cuatro gobiernos a nivel provincial. La agitación estalló en la provincia de Sindh –ahora administrada desde la mansión del gobernador en Karachi por Mumtaz Bhutto, un primo del primer ministro y uno de los mayores terratenientes del país– por la utilización de la lengua sindhi en los colegios, junto a la urdu; los mohajirs organizaron contramanifestaciones. Se introdujo un sistema de cuotas, con los trabajadores del sector público contratados sobre bases étnicas y regionales, consolidando las divisiones y creando vínculos verticales sobre líneas étnicas, en lugar de la frágil solidaridad de clase que había surgido en el transcurso de la militancia obrera de 1968-1972. Bajo la dictadura del general Zia-ul-Haq que se prolongó desde 1977 hasta 1988, los mohajirs de Karachi fueron organizados por el

<sup>1</sup> Un relato más completo lo proporciona Kamran Asdar Ali, «The Strength of the Street Meets the Strength of the State: The 1972 Labour Struggle in Karachi», *International Journal of Middle East Studies*, vol. XXXVII, 1, 2005.

cada vez más poderoso Movimiento Qaumi Mohajir (MQM) dirigido por Altaf Hussain, hijo de refugiados de habla urdu procedentes de India que había surgido en la década de 1980 como dirigente estudiantil mohajir oponiéndose a las cuotas para los sindhis.

Karachi se ha convertido en un microcosmos de todas las divisiones étnicas que recorren la ciudad y el campo en Pakistán. Las diferentes comunidades pueblan distritos a los que consideran dominios propios, cercados para evitar la intrusión de personas de fuera. Cada uno tiene su propia identidad, un modo de vida específico reafirmado por la cultura y el lenguaje, una reclamación de un nicho particular en el mercado de trabajo y una específica y clientista forma de representación política. Los emigrantes del campo de Sindh son principalmente seguidores del PPP, dirigido por la hija de Bhutto, Benazir, después de que el propio Bhutto fuera incriminado y ahorcado por Zia. También Benazir fue asesinada, tiroteada cuando estaba haciendo campaña para las elecciones de 2008. Su marido, Asif Ali Zardari, está ahora en el poder después de abrirse camino hasta el trabajo de presidente del país sobre la base de la pena causada por el asesinato de su mujer. Durante la década de 1990, tanto los gobiernos del PPP como de la Liga Musulmana en Islamabad –la nueva capital levantada a cientos de millas al noreste a comienzos de la década de 1960– hicieron intentos para poner en su sitio al mafioso MQM<sup>2</sup>. Altaf Hussain huyó a Londres en 1992; condenado *in absentia* por el asesinato de disidentes del MQM, continuó dirigiendo la organización desde la distancia. Con su importante banco de votos mohajir, el bloque del MQM de la Asamblea Nacional ha desempeñado regularmente el papel clave dentro de los gobiernos encabezados por el PPP o la LM. En Sindh mantiene alrededor de una cuarta parte de los escaños de la Asamblea Provincial, igualando al PPP.

### *Buitres en lucha por el poder*

En Karachi el MQM y el PPP llevan la voz cantante y, bajo el adagio de que los ganadores se llevan todo, han sido capaces de marginar a todos los demás contendientes. Los recién llegados tienen que utilizar la fuerza de las armas para obtener acceso al cerrado escenario político. Un ejemplo de esto es la gran operación policial que se produjo en mayo de 2012 dirigida a erradicar el gansterismo en Lyari, uno de los asentamientos más antiguos al noreste de la ciudad vieja. Los habitantes de Lyari, principalmente de ascendencia sindhi y baloch, están amontonados en congestionados barrios que bordean los márgenes del río Lyari, un laberinto de pequeñas calles y callejones. Se calcula que la población del distrito alcanza los 1,7 millones de habitantes, aunque en Pakistán es difícil tener datos fiables. Minúsculas viviendas de dos habitaciones albergan al marido, la mujer, los hijos y a unos cuantos parientes próximos. El hacinamiento

<sup>2</sup> El MQM cambió en su nombre «Mohajir» por «Muttahida» (unido) en un intento por «hacerse nacional», manteniendo el mismo acrónimo.

doméstico es una de las razones por la que los hombres prefieren quedarse en la calle en vez de estar en la casa; todos los barrios tienen un mercado que es el punto central de encuentro. La mayoría de los hogares tienen que arreglárselas con unas 10.000 rupias o 100 dólares mensuales y las mujeres y niños contribuyen al presupuesto familiar mediante una amplia variedad de tareas. Estos ingresos suponen menos de 1 dólar per cápita diario, lo que mantiene a las familias ahogadas en la pobreza. La oferta de trabajo es mucho mayor que su fluctuante demanda. Los jóvenes, incluso con un par de años de educación secundaria, encuentran prácticamente imposible adquirir la cualificación para obtener un trabajo estable. Dan vueltas por el mercado local esperando que alguien contrate su mano de obra.

En estas condiciones ha surgido una economía criminal a gran escala. En el nivel inferior los que participan en ella operan por su propia cuenta como ladrones, rateros, carteristas, receptores de mercancías robadas, actores porno, falsificadores o como intermediarios en toda clase de turbios tratos. Hay conglomerados de bandas pequeñas y grandes en todos los barrios, especializadas en locales de juego, prostitución, tráfico de armas, drogas o bebidas alcohólicas. Más rentable pero también más arriesgado que este comercio ilegal es la extorsión de los grandes almacenes y otras empresas a cambio de protección, o alquilar a los miembros de la bandas como guardaespaldas de gente importante. La provisión de seguridad es necesaria para mantener la extorsión dentro de unos límites, una actividad que puede ser una parte fundamental de la misma banda que la proporciona. El secuestro de gente con recursos para obtener un recate también encaja en este modelo de asaltar a los pudientes. Los jóvenes reclutados para esta industria comienzan su carrera como miembros a tiempo parcial en las proximidades de la banda y tienen que abrirse camino antes de que se les confíe un trabajo serio. Una vez que lo logran es prácticamente imposible abandonarlo. La escala de la economía criminal permite que los dirigentes de las bandas vivan por todo lo alto y sus apodos infundan pavor. Pero no pueden moverse libremente debido a los rivales que rodean su territorio y están constantemente envueltos en luchas para defender o expandir sus límites. Las armas están disponibles en abundancia; en Karachi no son solamente la policía y las patrullas paramilitares las que se mueven en carros blindados por los que asoman fusiles y metralletas. Las fiestas de bodas, las festividades religiosas y las concentraciones políticas se celebran con disparos al aire, no sólo para animar, sino también como muestra de poder dirigida a recalcar ante los transeúntes que a estos hombres no se les puede tomar a la ligera. En 1989 un cierto número de mercenarios yihadistas, reclutados y armados por Estados Unidos y Arabia Saudí para luchar contra las fuerzas soviéticas en Afganistán, pasaron a los negocios privados tras su regreso a Pakistán. Desde 2001 han estado aprovechándose de los grandes envíos de armas y otras mercancías que llegan a Karachi con destino a las fuerzas de la OTAN y de la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad) en Afganistán. Según cálculos conservadores, no menos de una cuarta parte de estos envíos desaparecen

en la economía sumergida; en Quetta hay un mercado negro que se conoce como el Bazar de la OTAN. El desvío de las mercancías es el resultado de un trabajo de equipo entre la mafia y la policía, un robo instigado e inducido por la Marina y la Aduana que controlan los muelles. En la ciudad las armas forman parte de la vida cotidiana.

La acción policial en Lyari estuvo cuidadosamente planeada. El objetivo era irrumpir en los cuarteles desde los que operan las bandas, confiscar sus armas y detener a sus dirigentes (o eliminarlos si ello era más viable). En el primer día de la incursión el distrito fue acordonado: no se permitió que los alimentos frescos llegaran a los mercados; se cortó el suministro de agua, electricidad y gas, así como internet y los teléfonos móviles. Los altavoces daban instrucciones a los habitantes para que permanecieran en sus casas a riesgo de ser tratados como combatientes. La gente tuvo que sufrir el calor del verano –temperaturas de 40 grados o más– apiñadas en sus viviendas sin ventilación. Una fuerza invasora de dos mil policías y tropas paramilitares entraron a pie y en vehículos blindados. El enemigo se mostró a su altura, atacando puestos de policía e intercambiando disparos en las calles. Las bandas habían almacenado armamento pesado, incluyendo ametralladoras, rifles de precisión de largo alcance, gases lacrimógenos, granadas e incluso lanzamisiles que produjeron daños en los vehículos blindados. La batalla duró ocho días y ocasionó docenas de víctimas aunque muy pocas entre los mafiosos. La mayoría de los heridos fueron transeúntes que permanecieron sin atención médica; el servicio de ambulancias no fue autorizado para trasladarlos a los hospitales de la ciudad. Para los gobernantes de la ciudad más vergonzoso que el fracaso de la operación policial fue que la población de Lyari se pusiera de parte de las bandas y se volviera abiertamente en contra del Estado. En los vecindarios donde los combates fueron más encarnizados, los habitantes salieron a manifestarse y corear consignas contra las tropas. Enfrentada a la resistencia popular, la policía abrió fuego sobre los manifestantes, una respuesta que alimentó la ira en los barrios contra los agentes de la ley y el orden.

Lo que se necesita resaltar, sin embargo, es que detrás de la fachada de lucha contra el crimen de la operación policial en Lyari había un escenario totalmente diferente, un escenario de buitres luchando por el poder, de ahí la quema de banderas y pancartas que los partidos políticos tenían distribuidos en estas localidades. Los retratos de políticos del PPP fueron arrancados y pisoteados, sus propiedades en el distrito fueron incendiadas. Los gánsteres mataron a un dirigente del PPP; los familiares de otros, que habían desaparecido del mapa, fueron asesinados. Claramente hay algo más en juego que la imposición de la ley y el orden, algo más que la «limpieza a fondo» de la actividad criminal voceada por los medios de comunicación locales. Muchas bandas se formaron como la milicia armada de los partidos políticos o se han transformado en ella. Proporcionan guardaespaldas para la protección de los líderes del partido, si es necesario eliminan a los rivales de sus patronos, se hacen cargo de cualquier negocio sucio, intimidan a los cuadros del partido para que muestren una

obediencia incondicional y exigen «donaciones» de promotores inmobiliarios, constructores y de otros empresarios que dependen de funcionarios políticos que autorizan sus negocios. Su recompensa por los servicios que prestan a los que están en el poder toma la forma de autorizaciones para practicar su propia clase de criminalidad, así como intercesión con la policía y los tribunales si se meten en problemas.

De forma abierta y encubierta estas actividades están entrelazadas hasta tal punto que es prácticamente imposible ver donde empieza una y acaba la otra. Por poner un ejemplo, el anterior ministro de la vivienda del gobierno provincial de Sindh autorizó a todos los miembros de la Asamblea Regional para que distribuyeran treinta licencias de armas al mes para la protección de los trabajadores de sus partidos. En otras palabras, Zulfikar Mirza ha autorizado a la mafia urbana para que lleve armas. El actual ministro del Interior sindhi ha expresado sus lamentos por la pérdida de vidas durante la campaña de Lyari, añadiendo que el daño a las propiedades será debidamente compensado. Pero no se ha atrevido a aparecer por el distrito ni siquiera con la protección del Estado. Al aprobar la operación, el PPP, anteriormente la principal fuerza política de Lyari, ha perdido irreversiblemente el banco de votos que tenía ahí.

La mayor banda de Lyari es de origen baloch, una minoría en rápido aumento en Karachi. El jefe de la banda se dio cuenta de que resultaba más rentable adquirir poder político independiente en vez de llegar a acuerdos con los buitres del PPP. Con este objetivo transformó a su banda en un movimiento social, el Comité Popular Aman (paz) (CPA). Enfadado ante la aparición de un nuevo competidor, el gobierno provincial del PPP y del MQM encargaron a la policía la operación en Lyari con vistas a poner en su sitio a este advenedizo. Ambos partidos operaran como socios declarados en la coalición gobernante y como rivales subterráneos enzarzados en peleas de bandas; han cerrado filas para neutralizar un peligro común: una nueva lealtad que atrae a sus propios antiguos mercenarios. Mientras la batalla en Lyari estaba en su apogeo, un portavoz del CPA consiguió escapar del distrito contando con ayuda entre las filas de la policía. Apareció unos días después en Londres para dar una conferencia de prensa en la que denunciaba el brutal asalto sobre un auténtico movimiento popular que quiere, por el bien de la gente común, obtener su justa parte de poder. En realidad, este tipo de actividad política no trata de servir a los intereses de la gente, sino que busca amasar dinero tan rápidamente como sea posible, ya que no se sabe las cartas que te tocarán el día de mañana. La rápida expansión de Karachi ha supuesto importantes obras de infraestructura. Para obtener estos contratos, los promotores inmobiliarios y los magnates de la construcción tienen que pagar un precio muy por encima del licitado; estos enormes gravámenes nunca aparecen en la contabilidad de la ciudad. En la cima del Estado las cosas no son diferentes: al presidente Zardari se le ha conocido durante mucho tiempo como el «Señor Diez por 100», aunque sin duda el porcentaje es mucho mayor. Su leal primer ministro Yousuf Raza Gilani sólo fue depuesto en junio de 2012

una vez que el Tribunal Supremo le hubiera encontrado culpable de negarse a que las autoridades suizas reabrieran la investigación por corrupción contra Zardari, que ha guardado parte del botín acumulado en cuentas bancarias en ese país. En agosto, el tribunal citó al sustituto de Gilani, Raja Pervaiz Ashraf –también conocido como «Raja el Rentas» gracias a sus peculiares costumbres– para que explicara por qué tampoco él había conseguido hasta entonces hacer cumplir el mandato del tribunal.

### *Vidas de trabajo*

Desde comienzos de la década de 1990, la población de Karachi ha crecido más del doble. Muchos de los que llegan proceden de las zonas próximas del interior, principalmente agricultores pobres y sin tierras que han sido expulsados de la economía rural. Por las mismas razones se les unen emigrantes de las tierras golpeadas por la pobreza de Balochistan. Los pastunes de las regiones tribales de ambos lados de la frontera afgana han huido de la guerra que asola sus tierras natales, e incluso aquellos que prefieren permanecer pueden ser expulsados por los ataques de los drones y del ejército de Estados Unidos. En su mayor parte se han asentado en los florecientes *katchi abadis* de la ciudad: Korangi en el sureste, Baldia y Orangi en el noreste, Lyari, Malir y muchos otros. Los *katchi abadis* consisten fundamentalmente en viviendas de dos habitaciones, con techos de hojalata y construidas con bloques de hormigón, que albergan a una familia de ocho o nueve personas; los asentamientos más antiguos han aumentado su densidad con el tiempo y ahora tienen casas de dos y tres plantas. Las aguas residuales a menudo circulan por desagües en la superficie; obtener el suministro de agua y electricidad supone la intervención política, involucrando a los habitantes en el sistema de partidos. Algunas de las peores condiciones de degradación y masificación se encuentran en los viejos pueblos que han sido tragados con el crecimiento de la ciudad<sup>3</sup>.

Cada oleada de gente nueva tiene que abrirse camino en el mercado de trabajo de la ciudad. El empleo en la economía informal tiene una naturaleza muy nepotista y el acceso al trabajo está muy determinado por lazos familiares o regionales. Esto hace más difícil que los extraños puedan tener éxito. En Korangi hay muchos miles de talleres que producen textiles para la exportación. Su tamaño es variable, pudiendo tener docenas o cientos de empleados. La jornada laboral está establecida en ocho horas, pero las horas extras obligatorias pueden alargarla a doce horas durante los periodos de mayor actividad. Los artesanos aquí son trabajadores con experiencia, hombres principalmente, aunque también se han incorporado jóvenes y mujeres solteras. Los niños se emplean como aprendices. La mano de obra está mezclada: mayormente sindhis y punjabíes, pero tam-

<sup>3</sup> Una investigación sobre las condiciones en los *katchi abadi* se encuentra en Arif Hasan y Masooma Mohib, «The Case of Karachi», *Global Report on Human Settlements 2003*, estudio de Naciones Unidas.



bién hay pastunes y gentes de Baloch, de Bangladés y grupos de rohingya procedentes de Birmania. Los propietarios de los talleres dejan el reclutamiento y la supervisión en manos de sus contratistas, que actúan como gestores y pagan los salarios. Los contratistas a su vez pueden elegir a quien favorecer con más asignación de trabajo, mejores salarios, carnets de identidad o con ayudas para asistencia médica. La factura salarial de un contratista con un equipo de 27 trabajadores era de 150.000 rupias, pero mientras a algunos se les pagaba 7.000 rupias o más, otros ganaban menos de 5.000. La renta mensual por una sola habitación compartida por dos o tres hombres jóvenes es de 2.000 rupias; una vivienda de dos habitaciones para una familia de seis o siete miembros es de 4.000 rupias mensuales en gastos fijos. También hay una gran cantidad de talleres pequeños, informales, en el *katchi abadis* y en los barrios de infraviviendas de la ciudad vieja: industrias de la confección y del cuero, mecánica ligera, construcción, clasificación de residuos y reciclado, etcétera.

Cualquier estabilidad en las vidas de los obreros de las factorías es probablemente temporal. El cierre de fábricas es habitual; la enfermedad o los caprichos del contratista pueden conducir al despido. Los frecuentes cortes del suministro eléctrico en Karachi provocan graves crisis en las zonas industriales; las interrupciones —reducciones de la energía— no siguen una regla establecida y los trabajadores tienen que quedarse de brazos cruzados hasta que vuelve a llegar la electricidad, sin saber si serán capaces de cumplir con su cuota de trabajo a destajo. La tensión dentro y alrededor de las naves es elevada, no por culpa del exceso de trabajo, sino por la falta de él. Para afrontar el errático ritmo de trabajo se utiliza ampliamente el *gutka* o *charas* (marihuana). Pero la adicción resulta cara. Los pocos sindicatos que existen dentro de la economía informal no sirven de ayuda para mejorar las condiciones de trabajo. Seis capataces que organizaron una huelga en Faisalabad en 2010 han sido sentenciados a cadena perpetua bajo las leyes contra el terror, declarados culpables de cargos proporcionados por los propietarios de las fábricas, para «dar un ejemplo».

### *Huida de la tierra*

Aunque vivan en la pobreza, los trabajadores de las factorías están significativamente en mejor posición económica que muchos recién llegados del campo, que luchan por encontrar alguna clase de trabajo. En los últimos años las repetidas inundaciones en el valle del Indo debido a las fuertes lluvias del monzón han desplazado a un gran número de gente del interior de Sindh y del Punjab. Algunos han sido albergados en los nuevos bloques de apartamentos con pocos servicios que han sido sembrados en las afueras de Karachi, por ejemplo en Gulshan no lejos de la carretera a Hyderabad. Pero muchos no tienen otra opción que acampar en los campos o en las cunetas de las carreteras en improvisados *jhupris*, chozas construidas con ramas rotas, bambú, plástico, paja y trapos. Todas las señales apuntan a que estos emigrantes han venido para quedarse. Forman

parte de una reserva ambulante de trabajo que ha sido expulsada del medio agrario y que no ha encontrado un lugar en la economía de Karachi. Llegan a las afueras de la ciudad pero se quedan atascados allí, consumiéndose en el fondo de la economía informal.

Para entender por qué vienen hace falta tomar en cuenta lo que están dejando detrás. A principios de este año visité el pequeño pueblo de Mir Hot, en una zona de Sindh que permaneció inundada durante la mayor parte de 2011. A primera vista había pocas señales del desastre. La carretera conduce a través de un terreno inhóspito y polvoriento donde se realiza un cultivo comercial de trigo y algodón, pero durante los calurosos meses de verano los campos permanecen abandonados. El asentamiento consiste en cincuenta viviendas, chozas de barro con tejados planos. El único edificio de piedra es una abandonada escuela con su tejado derrumbado tras las últimas inundaciones; desde entonces la educación de los niños de Mir Hot ha finalizado. Probablemente queden sin alfabetizar como sus padres. La electricidad se contrata con un pueblo cercano, proporcionada por medio de pinchar la línea, y sólo unos cuantos hogares tienen una bombilla o dos. Nadie tiene un televisor. Una de las viviendas tiene una pequeña tienda; aparte de esta, la agricultura proporciona el único medio de subsistencia. Los servicios del gobierno más cercanos se encuentran a doce kilómetros, en el pueblo de Badin. El hombre que actúa como jefe del pueblo tiene unos 25 acres de tierra, la mitad los cultiva él mismo y el resto lo deja en régimen de aparcería a los habitantes del pueblo que tienen como mucho de dos a cuatro acres que trabajar; demasiado poco para vivir de ellos de forma que están obligados a arrendar parcelas adicionales de los grandes terratenientes de la región. Los hogares más pobres en Mir Hot carecen por completo de tierras, aunque algunos retienen por lo menos el mínimo necesario de herramientas agrícolas y unas cuantas cabezas de ganado, lo que les sitúa por encima de aquellos que carecen de cualquier capital agrícola y apenas rozan las 200 rupias diarias (2 dólares) para sus familias.

La pobreza en el medio rural de Sindh está agravada por la descaradamente injusta jerarquía de la propiedad de la tierra. En la cima están los *jagirdars*, que se atribuyen muchos miles de hectáreas; tras ellos está un número mucho mayor de grandes terratenientes cuyas posesiones oscilan entre las 500 y las 1.000 hectáreas y que también forman parte de esta elite rural. Por debajo de ellos viene una larga cadena de intermediarios que llega hasta los pequeños terratenientes que ponen los acres de tierra que trabajan los agricultores. La agricultura a lo largo de esta vasta planicie, con su clima desértico, depende del riego a gran escala mediante canales que traen hasta estas fincas el agua del Indo y de sus afluentes. Esto elevó el valor de la tierra pero la contrapartida ha sido aumentar todavía más su excesivamente desigual distribución. La elite terrateniente tiene un fuerte interés en mantener el sistema de aparcería como el eje de la economía agraria. La ley de arrendamiento que entró en vigor en 1950 recompensaba al *bari*, al trabajador agrícola, con la mitad de la cosecha que recogía;

en la práctica, la parte del *hari* se queda muy por debajo de eso, ya que la mayoría de los terratenientes no entregan más que una cuarta parte de la producción, y de ella hay que descontar los costes de las semillas, fertilizantes y tasas de agua. El contrato de aparcería reduce de hecho al agricultor a la categoría de bracero, sin embargo le hace asumir la responsabilidad de proporcionar el equipo y los animales de carga necesarios para el trabajo, y correr con el riesgo de pérdida de la cosecha, sin ofrecerle una retribución adicional por ello. Los agricultores sin tierra no tienen otra opción que ofrecerse como aparceros a tiempo completo; los contratos conllevan un préstamo, parcialmente entregado en especie –normalmente cereales– pero que se trata como dinero en metálico que tiene un interés lo que lleva a unos onerosos pagos. Hay un aspecto en el que los agricultores de Mir Hot son ligeramente menos vulnerables que la mayoría y es que sus viviendas no pertenecen al terrateniente. Más a menudo, la relación terrateniente-*hari* está más cerca de la servidumbre, con las relaciones económicas y de poder alcanzando al hogar, no sólo en la forma de *droit de seigneur*.

Con este telón de fondo ¿cuál ha sido el efecto de las repetidas inundaciones de los dos últimos años? Si a primera vista el desastre no dejó huellas visibles puede deberse a que apenas era posible para la mayoría de los habitantes vivir en peores condiciones que las habituales. Como señalaba uno de ellos, «teníamos tan poco que no podíamos perder mucho». No había habido cosechas en los campos de manera que los agricultores no habían pagado mucho en costes de cultivo. Las cabañas se vieron inundadas pero no tanto como para que los habitantes tuvieran que ser evacuados; recibieron suministros de alimentos del exterior por medio de ayudas. Después de dos meses el nivel de las aguas descendió y permitió que sus exiguas pertenencias se secaran. El mayor contratiempo fue la falta de forraje para el ganado; la falta de terrenos de pasto obligó a muchos a sacrificar a sus animales. Reemplazarlos significaba adquirir nuevas deudas con el terrateniente, el único suministrador de crédito. Lo que era llamativo era el tono lacónico de los habitantes del pueblo cuando hablaban de la inundación. Para muchos, el ciclón que golpeó a Mir Hot en 1999 fue un desastre mayor, casi todos se encontraron con sus casas destruidas. La Dirección General de Gestión de Desastres de Pakistán ya ha anunciado alarmas por inundaciones en 2012 para 29 distritos, 12 de ellos en Sindh, que afectan a treinta millones de personas. Leyendo entre líneas los informes oficiales, está claro que un factor que contribuye a ello ha sido el pobre mantenimiento de diques, puentes, esclusas y canales debido a una combinación de recursos inadecuados y de letargo burocrático. Las autoridades provinciales de Sindh prometieron compensar a las víctimas que pudieran demostrar sus pérdidas, pero los fondos distribuidos hasta ahora han ido a parar principalmente a los terratenientes, en vez de a los aparceros y trabajadores agrícolas que deberían haber sido los primeros en cobrar.

Aun así los *jagirdars* tenían razón para sentirse amenazados por las inundaciones. Regiones enteras del Bajo Sindh sufrieron inundaciones y cien-

tos de miles de agricultores pobres tuvieron que abandonar sus sumergidos pueblos, a menudo con poco más que algunos cacharros y ropas auestas. Fueron alojados en campos de emergencia levantados por las autoridades, dependientes de ONG para la alimentación y asistencia médica. Las sólidas mansiones de los terratenientes están normalmente situadas en terrenos elevados y pocas tuvieron que ser abandonadas. Sin embargo, corrían el riesgo de perder su dominio sobre sus aparceros como consecuencia de las inundaciones; los habitantes de los campamentos se habían ido lejos del alcance de sus amos, y los *jagirdars* tenían buenas razones para temer que pudieran huir del todo de las ataduras agrarias. Después de las inundaciones el gran número de emigrantes que aprovecharon la oportunidad para escapar hacia la economía urbana muestra que sus temores estaban bien fundados. Para minimizar el riesgo los grandes terratenientes exigieron que el gobierno provincial de Sindh cerrara prematuramente los campos. Las autoridades naturalmente aceptaron. Los *jagirdars* son los descendientes de viejas y prominentes familias que están bien relacionadas con los todopoderosos. Muchos de los miembros de la Asamblea Provincial en Sindh son *jagirdars*, y tienen mucho que decir a la hora de cubrir puestos en la burocracia, tanto puestos altos como bajos, y en cómo maneja el servicio civil sus asuntos diarios. Después de que los campos fueran desmantelados, una mayoría de los aparceros regresaron a su subordinada existencia, careciendo de cualquier perspectiva alternativa. Fue volver a empezar, ahora cargados incluso de más deudas para reemplazar los pocos bienes y el ganado perdidos.

### *El dominio de los jagirdars*

Sería una equivocación pensar que los agricultores en Sindh habían sido empobrecidos por las inundaciones. Su miseria está causada por el régimen agrario en el que a menudo han estado encerrados de una generación a la siguiente. Su sometimiento está legitimado por una cruel forma de contabilidad, administrada por los terratenientes o sus representantes, en la que los recibos, los gastos y un interés desorbitado por los recibos pendientes se contabilizan de formas calculadas para confundir a los mayormente analfabetos aparceros. Los *jagirdars* no invierten en sus propiedades para aumentar su productividad, sino que se contentan con tomar la mayor parte posible de lo que producen los aparceros; a la inversa, los *baris* saben que ellos no se beneficiarán de cualquier intento por mejorar la eficiencia. El sistema de aparcería aquí no sólo es una forma de superexplotación, sino que mantiene un régimen agrario que tiene efectos dañinos en un sentido económico general. El *lobby* político de los terratenientes sigue siendo tan poderoso como siempre, y no hay señales de la profunda reforma agraria que se pide con tanta urgencia.

Pero también sería un error asumir que los *baris* aceptan pasivamente el miserable destino que les aguarda. Desde hace mucho tiempo la resistencia ha estado rugiendo en las profundidades del Sindh rural, y las tensio-

nes sociales sin duda han aumentado durante la década pasada. Esta escalada está alimentada por la agitación política pero incluso más por la creciente presión de la población y el empeoramiento de la proporción entre persona y tierra. Hace diez años, la cantidad de tierra asignada a la mayoría de las familias *baris* había caído en muchos lugares desde los acostumbrados ocho acres hasta la mitad, por debajo del nivel de lo que es económicamente viable. En consecuencia, no tienen otra opción que solicitar nuevos créditos<sup>4</sup>. Esto supone convertir lo que todavía se consideraba un contrato de aparcería en un acuerdo laboral, un proceso de coercitiva proletarianización agraria acompañado por un creciente endeudamiento.

Impotentes para negociar un acuerdo menos oneroso, los *baris* apenas tienen otra opción que tratar de huir de su cautiverio. Yo visité un campamento para agricultores fugitivos dirigido por una organización de derechos humanos en el Sindh rural. Estos refugios no son seguros, se sabe que los terratenientes los han asaltado para capturar a los desertores. Hablé con Dehraj, un antiguo *bari* del distrito de Sanghar que después de las inundaciones de 2011 decidió romper su relación amo-criado. A su regreso del campo de emergencia, donde él y su familia habían pasado seis semanas, el amo le informó que su deuda había aumentado hasta las 200.000 rupias. Cuando el *bari* se negó a aceptarlo el terrateniente insistió en que la familia trabajara para él sin cobrar nada. La disputa prosiguió durante meses acabando finalmente en una ruptura que condujo a la partida de Dehraj, junto a 24 miembros de su familia, en un camión alquilado para la ocasión. Sabían a dónde ir ya que la colonia de refugiados es muy conocida en el distrito. Pero dos miembros de la familia –la mujer de su sobrino y un hijo pequeño quedaron cautivos en el *baveli* del terrateniente durante su partida–. Dehraj y sus hermanos tuvieron trabajo ocasional en una fábrica de ladrillos de la vecindad, cargando ladrillos en camiones por unos cuantos cientos de rupias diarias. Otro residente del campo ha sido tomado como intermediario en la fábrica de ladrillo y puede que proporcione a Dehraj un adelanto, un *peshgi*, de 5.000 rupias o más. Todos los trabajadores de esta industria rural son reclutados sobre la base de un adelanto, en otras palabras con base en la dependencia de un endeudamiento que evita que el que busca trabajo se mueva libremente y que asegura que los propietarios tengan suficiente mano de obra para la siguiente temporada. Los equipos reciben salarios tan bajos –430 rupias por producir 1.000 ladrillos diarios, vendidos por el propietario de la fábrica por 4.000– que se ven obligados a pedir nuevos préstamos. Los términos del empleo se diferencian poco del contrato que mantiene cautivo al *bari*.

La huida de la tierra en Sindh se extiende cada vez más, impulsada por un sistema de producción anticuado, por un régimen agrario en el que el poder se encuentra dentro de una pequeña capa de grandes terratenientes

<sup>4</sup> Sobre la dependencia del endeudamiento en Sindh, véase K. Lieten y J. Breman, «A Pro-Poor Development Project in Rural Pakistan», *Journal of Agrarian Change*, vol. II, 3, 2002, p. 336.

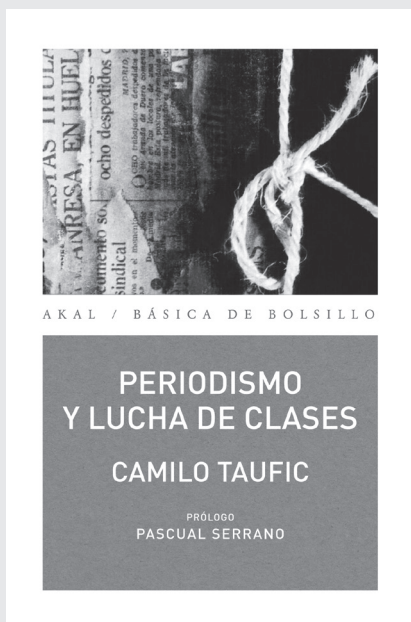
a los que están atados en servidumbre millones de agricultores pobres, y por el crecimiento de la población. Un desastre natural que aleja temporalmente a los *baris* de sus pueblos simplemente hace que la crisis subyacente se ponga de manifiesto. Así es como hay que entender las inundaciones que han arrasado el Bajo Sindh en los dos últimos años. Cientos de miles de trabajadores agrícolas fueron recolocados en campos de emergencia, y este éxodo de sus hábitats familiares ayudó a estimular el impulso por poner fin a su servidumbre rural. Los trabajadores sociales en los campos, para los que las escenas de pobreza no resultan extrañas, se vieron profundamente impactados por el estado de miseria y privación de los *baris*, ocasionado no por las inundaciones, sino por la drástica malnutrición, las enfermedades y el agotamiento. Muchos acabarán acampados en las cunetas de Karachi, por lo menos libres de los *jagirdars*.

### *En la cúspide*

Karachi es el cuartel financiero y empresarial de Pakistán y la economía de la ciudad contribuye con más de una cuarta parte al producto nacional bruto. Esto significa que hay muchos beneficios por recoger y la clase política lo hace con ganas, sin más prioridades que su propio interés. Por descontado que esto es habitual en todas partes, pero la vulgar avaricia de los grandes jefes en Pakistán es difícil de superar. Su *dolce vita* está aislada de la vista pública en las zonas estrictamente controladas de Clifton y Defence, donde pueden retirarse tras los altos muros y las infranqueables vallas de sus mansiones palaciegas para el confort de su amplia familia. Como una salvaguarda extra, Zardari ha comprado grandes extensiones de propiedades que rodean su propia y suntuosa casa. Para los propietarios y directivos de las empresas quedan suficientes beneficios para vivir con el mismo esplendor. En el Club Sindh, exclusivo de la elite de Karachi, no sólo la familia Haroun, que también posee el Dawn Media Group, se firman los acuerdos bajo las arañas de las luces como si la época colonial no hubiera acabado. Algunas veces tuve la oportunidad de observar la vida en la cúspide, como un invitado extranjero en las fiestas que estos barones celebran entre ellos. Una típica velada se producía en un precioso jardín. Junto a una enorme piscina, un excelente recital de música clásica se celebraba bajo la luz de la luna. El músico que tocaba el sitar había venido para la ocasión desde Alemania, donde tiene mucho éxito. Corrían los vinos franceses y se podían tomar bebidas alcohólicas. «Del *catering* se han ocupado mis amigos de los muelles», bromeaba el simpático anfitrión entre risas de complicidad.

La deuda externa del país es para quedarse atónito; se sostiene principalmente gracias a las consideraciones geopolíticas de Estados Unidos. La pequeña parte de la «ayuda» que llega a los fondos del Estado no se gasta en levantar una sociedad civil, menos todavía en afrontar la crisis de subsistencia que define la vida para los extremadamente pobres, un gran segmento de la población. A los ojos del público, la esfera política es de

confusión, plagada de demostraciones de fuerza; pero entre bastidores los patronos comparten el botín. Para apropiarse de la riqueza los partidos políticos necesitan a las bandas, y estos mercenarios armados también sirven cuando el electorado da muestras de descontento. La criminalidad y la política son las dos caras de la misma falsa moneda. Aunque la criminalidad surge como una fuerza política propia, los partidos recurren a la violencia subterránea para ganar y consolidar su porción de poder. No se trata tanto de que el Estado en Pakistán haya fracasado, sino de que está dirigido por un grupo de buitres que trafican con el poder como su personal feudo y sociedad criminal. Es un régimen que no podría ocuparse menos por la nefasta situación de la gente. Uno empieza a entender por qué muchos de los indigentes se ven cada vez más atraídos por el oscurantismo de los talibanes. Tienen la tentación de considerarlo como un medio de escapar de lo que para ellos es un callejón sin salida.



**Esta obra tiene por objeto destruir un mito: la inocencia de la información.**

En ella se expone que las noticias son mandatos y el periodismo, una forma de dirección social. La información determina las decisiones de quienes la reciben sólo cuando estos la aceptan y la asumen. El gran peligro que acecha a nuestras sociedades es que los medios para imponer esa aceptación se están perfeccionando y son cada vez más eficaces.

Akal Básica de bolsillo  
ISBN 978-84-460-3616-6  
Páginas 256

  
akal  
www.akal.com